

ANALISIS DEL MES BASE-ECTA

Balance 1997. Política Agraria.

Fue un año más a la “deriva”, con cambios a nivel de altos mandos, con estancamientos y algunas iniciativas que aún deben dar sus frutos, con hechos y altercados que pusieron nuevamente en evidencia la improvisación, ineficiencia y corrupción en las operativas del MAG. Entre las iniciativas del año, destacan el envío al Parlamento de un paquete de propuestas de leyes sobre la reforma institucional del MAG y el IBR, propuestas que llevarán muchos años de elaboración, que aún tienen cabos sueltos e inconsistencias, y que se espera sean analizadas el año entrante, con o sin alternancia en el poder. También cabe mencionar la elaboración de un Plan Maestro para el Programa Global de Cooperación para el Pequeño Productor de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), con el que se pretende obtener créditos blandos por valor de US\$ 190 millones. Por último, un programa piloto de Inversiones Rurales Comunitarias en 3 departamentos del país, financiado por el Banco Mundial, podría generar una nueva dinámica de relacionamiento con comités y organizaciones campesinas, pero problemas en su difusión y fallas en la capacitación para el diseño de propuestas sumado a las incertidumbres del contexto hacen que su ejecución sea más lenta de lo deseado. Algo similar acontece con la ejecución de los fondos para combatir la pobreza de la Secretaría de Acción Social (SAS/BID), de ahí que los proyectos de generación de ingresos sean aún escasos.

En lo que hace a las operaciones de rutina, este año no fue la extensión agraria la que estuvo en la picota sino otras dependencias del MAG. El Servicio Nacional de Salud Animal fue acusado por los ganaderos de fomentar el abigeato al no controlar la habilitación de mataderos municipales y resultó ser que sólo un 10% de los mismos opera con todas las de la ley. La Dirección de Defensa Vegetal se vio en figurillas al tener que implementar de un día para otro controles fitosanitarios en las fronteras “hasta fin de año” y esto para ponerse a la altura de sus pares argentinos que según altos funcionarios del MAG aplicaron una “especie de boicot” a frutas y verduras nacionales; si bien se trata de una medida acertada, que permitió incautar, por ejemplo, manzanas argentinas con residuos tóxicos “clorados”, la misma no es del todo efectiva, no hubo coordinación con funcionarios de Hacienda y de Aduanas y se hizo evidente que aún no estamos en condiciones de aplicar lo que el MERCOSUR prescribe. También el MAG decidió intervenir por segundo año consecutivo esa cueva de Ali Babá que parece ser el Servicio Forestal Nacional que en el transcurso del año recibiera muchas críticas de la Federación Paraguaya de Madereros por discrepancias en el manejo de las guías de traslado de rollos y de los planes de re-forestación; se trata ahora de aquietar los ánimos, luego de una serie de artículos periodísticos dónde se ilustra la corrupción de funcionarios supuestamente encargados de evitar el tráfico de rollos y la depredación de nuestros bosques. Se estima que actualmente unos 240 camiones con madera aserrada pasan al mes por Salto del Guairá, uno de los cruces de la frontera seca, rumbo al Brasil, subvaluando la carga y por lo tanto evadiendo impuestos. Y mientras los bosques se extinguen, el ministro de Agricultura se apresta a gestionar ante la banca multilateral nuevos préstamos para la reforestación.

En materia agraria, destacan al menos dos hechos. Mientras las primeras 150 familias comienzan a tomar posesión de sus lotes agrícolas en el vasto exdominio de Antebi, la ley 517/95 que expropiación del mayor latifundio del país aún no se concreta ya que existe una abismal diferencia entre la tasación del IBR y lo que reclaman los

propietarios en concepto de indemnización. El entredicho que podría llevar el caso a estrados judiciales, pone en evidencia la falta de criterios y los intrincados mecanismos de negociación para una indemnización que no tiene precedentes. Por otro lado, se inició el Proyecto de Desarrollo Sustentable del Chaco (PRODECHACO) coordinado por el MAG y la Comunidad Económica Europea. Pero la novedad consiste en que su implementación está supeditada a la regularización de las tierras indígenas del Chaco, el plazo vence en mayo de 1998 y se esperan novedades pronto.

Ahora bien, en el balance anual del MAG, que como es usual rescata más bien los aspectos positivos, el Ministro de Agricultura sostuvo que el principal logro de su corta gestión era el haber duplicado el área de cultivo del algodón; de 110 mil hectáreas sembradas en el ciclo 96/97 se pasó a unas 220 mil hectáreas en este ciclo 97/98, cifra muy por debajo de la meta inicial de 350 mil hectáreas. Pero en lo que hace a 1997, el sector agrícola sólo creció un 4,5% frente al 17% estimado oficialmente a principios de año y este comportamiento se debe a los repuntes en las cosechas de maíz, soja y arroz mientras que la caída de la producción algodonera fue del 58%. Más allá de las cifras, el hecho indica la corta visión de la burocracia del MAG en lo que hace a la reactivación del sector y las dificultades en la promoción de otros rubros que puedan generar ingresos alternativos. De hecho, buena parte de los esfuerzos del año se concentraron en la aprobación de un crédito de la banca privada, el Dresdner Bank de Alemania y como era de esperarse la operación no se concretó.

Pero en el balance oficial también hubo un espacio para la diversificación productiva, que ahora se reduce a rescatar lo que de hecho se produce para consumo, con o sin apoyo oficial. Se estima que los rubros tradicionales llegaron a cubrir 464 mil hectáreas y que los productos que están ganando espacio serían: maíz, mandioca, batata, caña de azúcar, tártago, banano, ka'a hee, sésamo entre otros. Sólo que los cálculos de rentabilidad y los mercados para estos y otros rubros no son ni evidentes ni seguros. La economía campesina sigue librada a su suerte, innovando en la medida de sus posibilidades pero sobre todo consumiendo sus magras reservas y energías, ¿hasta cuando?.